

Síntesis Cronológica

PRINCIPALES SUCEOS NACIONALES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008

▪ Juan Carlos Núñez Bustillos* ▪

1. Los secuestros y el “ya basta”

Los plagios de dos jóvenes, hijos de prominentes empresarios, en los que la complicidad y la incapacidad de la policía quedaron en evidencia, suscitaron airados reclamos al gobierno y grandes movilizaciones sociales.

A finales de mayo, Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, fue secuestrado en la ciudad de México en un falso retén en el que participaba una mujer que resultó ser agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI). La familia pagó el rescate, pero el joven no fue liberado. El 1 de agosto encontraron su cadáver.

* Periodista egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Cursó la Maestría en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario *El País*. Ha trabajado en diversos medios. Actualmente es colaborador del periódico *Público* de Guadalajara y jefe del Centro de Formación Humana del ITESO.

Las muestras de solidaridad con la familia no se hicieron esperar. En un partido de béisbol, cerca de diez mil personas rindieron un minuto de aplausos a la víctima y utilizaron pulseras con la leyenda “Ya basta”.

El caso Martí llevó a las autoridades a convocar a un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia. El 21 de agosto se firmó el documento en el Palacio Nacional. Los representantes de las diversas instancias gubernamentales y sociales signaron 75 compromisos a los que les pusieron plazos. En la ceremonia, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo: “Ésta no es una carta de buenas intenciones”. En tanto, Alejandro Martí reclamó a los funcionarios: “Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”. El reclamo del empresario recibió una ovación.

Las investigaciones posteriores demostraron que policías y ex policías participaron en el secuestro y asesinato de Fernando Martí, quien tenía 14 años.

El 30 de agosto tuvieron lugar, en diversas ciudades del país, multitudinarias manifestaciones que bajo el lema “Iluminemos México” exigían paz y seguridad. Cientos de miles de personas, muchas de ellas vestidas de blanco, tomaron las calles en marchas silenciosas. En la ciudad de México, representantes de 14 organizaciones sociales pidieron al presidente y al jefe de gobierno del Distrito Federal que si en seis meses no había resultados, destituyeran a sus procuradores y secretarios de seguridad.

Cien días después de la firma del pacto, Calderón reconoció: “Falta mucho por hacer”, mientras que María Elena Morera, presidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia, comentó que las acciones emprendidas en esa primera etapa eran importantes aunque no suficientes.

El 25 de agosto, Nelson Vargas, empresario deportivo y ex director de la Comisión Nacional del Deporte, hizo público el secuestro de su hija Silvia Vargas Escalera, quien había sido plagiada el 10 de septiembre de 2007. Los padres de la joven aparecieron ante los medios de comunicación para pedir información sobre el paradero su hija. Ambos reiteraron su súplica cuando se cumplió un año del plagio. El 27 de noviembre, Vargas denunció que desde el principio del caso la Procuraduría General de la República (PGR) tenía pistas que nunca siguió. Dijo que un hombre que trabajó durante dos años como chofer de la familia es hermano de un secuestrador que se encuentra prófugo. “¿Eso es no tener nada? Eso es no tener madre”, reclamó. Menos de una semana después, las autoridades dijeron que tenían información relacionada con el lugar donde presuntamente podría estar sepultada Silvia Vargas. El 11 de diciembre la PGR anunció que los restos encontrados en una finca de la ciudad de México eran los de la joven. Los asistentes a las ceremonias luctuosas reiteraron sus reclamos sobre la inseguridad del país.

En este contexto, se dio a conocer un informe oficial en el que se señala que la mitad de los policías del país que participaron en evaluaciones resultaron reprobados y son “no recomendables”.

Durante el segundo semestre del año, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso dos iniciativas en materia de seguridad. La primera plantea establecer cadena perpetua para los secuestradores que pertenezcan a algún cuerpo de seguridad, que lesionen, mutilen o maten a la víctima o que secuestren a menores de edad o discapacitados. El 22 de octubre mandó otra propuesta en la que propone crear una Policía Federal al mando de un comisionado que sustituya a la AFI y que tenga atribuciones para investigar. Además, en septiembre propuso un aumento de 39% al presupuesto relacionado con la seguridad y la justicia.

La Secretaría de Seguridad Pública federal anunció que a partir del 11 de agosto pondría en marcha unidades especializadas contra el secues-

tro en el que participarán 300 elementos altamente capacitados que tienen a su disposición los mejores equipos tecnológicos y aeronaves.

El 19 de agosto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el robo de autos se incrementó en 14% y para finalizar el año la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública en el que señala que entre 2001 y 2008 fueron secuestradas 20 mil personas en el país.

2. Los efectos de la crisis en México

Los problemas económicos se agudizaron en el segundo semestre de 2008. El 17 de septiembre, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció que la crisis del sistema financiero internacional “sin lugar a dudas tendrá un efecto en el desempeño de la economía mexicana”. Ocho días después afirmó que la crisis internacional era peor que la gran depresión de 1929 y el 12 de octubre, dijo: “Estamos ante una crisis de mucho mayor magnitud de lo esperado”. El 16 de diciembre, el presidente Felipe Calderón expresó ante mandatarios de los países latinoamericanos: “Estamos al borde de una recesión generalizada”.

Diversos indicadores empeoraron durante el semestre. A principios de octubre, la Cámara de Diputados anunció que replantearía las metas económicas para recortar el pronóstico de crecimiento de 3% y dejarlo entre 1% y 2%. El dinero que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos también decreció. El Banco de México anunció que entre julio y septiembre las remesas cayeron 6.5% con relación al mismo periodo del año anterior.

Los efectos de la crisis llegaban a México. El 7 de octubre el dólar alcanzó los 12.70 pesos, una pérdida de 14.46% de su valor en 12 jornadas. Para el día siguiente la devaluación sumaba 17%, por lo cual el Banco de México intervino para subastar 2,500 millones de dólares, con

lo que el precio de la moneda estadounidense bajó de 14.00 a 12.50 pesos. La institución anunció que si el peso se depreciaba más de 2% realizaría subastas por 400 millones de dólares cada día.

Ese mismo día el presidente Calderón dio a conocer, por medio de un mensaje especial, una serie de medidas para tratar de paliar los efectos de la crisis. Anunció la ampliación del gasto público en infraestructura, recortes al presupuesto 2009, la construcción de una nueva refinería de petróleo, así como desregulación y apoyos a pequeñas y medianas industrias.

El mensaje de Calderón no logró detener la caída del peso y el 10 de octubre el dólar se vendía por arriba de los 14.00 pesos, por lo que el Banco de México hizo ese día tres subastas de dólares que sumaron un total de 6,400 millones. En 72 horas, las reservas mexicanas habían disminuido en poco más de 10%.

El 12 de octubre, Carstens dijo que un grupo de empresas mexicanas realizaron “operaciones especulativas para tener utilidades”, con lo que ocasionaron la caída del peso. Las autoridades prometieron investigar a fondo y sancionar a los responsables. Para final del año no habían dado a conocer el resultado de las investigaciones ni se conocía de sanción alguna.

Las subastas de dólares continuaron. El 16 de octubre fue de 1,900 millones, lo que sumaba 10,800 millones en nueve días. El 24 de octubre vendió otros 1,096 millones. Al mismo tiempo, las malas noticias económicas se sucedían. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) anunció que el desempleo llegó a su nivel más alto en cuatro años, creció la morosidad en los pagos a tarjetas de crédito, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió su peor caída en los últimos cuatro años, Pepsicola anunciaba el recorte de 2,200 empleos en México y la Ford liquidó en diciembre a 650 trabajadores. El precio de las gasolinas aumentó en monto y frecuencia. A principios de septiembre los com-

bustibles subieron tres veces en una sola semana. Durante el año fueron 33 los incrementos. El alza de precios en el año fue de 6.23% al mes de noviembre y en diciembre el Banco de México anunció que la inflación anual fue de 6.56%, la más alta en los últimos siete años.

El 8 de diciembre, Calderón Hinojosa insistía en que haría todo lo posible para defender a los mexicanos de la “tormenta económica”.

3. Narcotráfico: terrorismo y corrupción

Atentados contra la población civil, la detención de altos mandos policiales y militares vinculados con el narcotráfico, secuestros masivos, el aseguramiento de un submarino cargado con cocaína, ataques con granadas a instalaciones policiales y a medios de comunicación, así como la decapitación de militares, fueron algunos de los hechos que marcaron el segundo semestre del año más violento en la historia reciente del país.

Por primera vez los narcotraficantes perpetraron un ataque contra la población civil. La noche del 15 de septiembre, durante la celebración de El Grito de Independencia en Morelia, Michoacán, los sicarios lanzaron dos granadas contra la gente que celebraba en la plaza principal de esa ciudad. El ataque provocó la muerte de ocho personas y heridas a 132. El gobierno ofreció una recompensa de hasta diez millones de pesos a quienes informaran sobre los autores del atentado. El 20 de septiembre aparecieron en Morelia *narcomantas* en las que el cártel La Familia responsabilizaba del ataque a Los Zetas. El 26 de septiembre, la PGR detuvo a tres hombres, presuntamente los autores materiales del ataque.

En octubre, un comando lanzó granadas contra las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. El ataque dejó un saldo de tres heridos. Con granadas también fue atacado, en noviembre, el periódico *El Debate*, de Culiacán.

En octubre fueron degollados seis militares en Nuevo León y en diciembre se encontraron en Guerrero los cuerpos decapitados de otros ocho militares con un mensaje de amenaza para el Ejército.

En Sinaloa, un grupo de sicarios tomó 40 rehenes y otro comando asesinó a ocho personas, entre ellas tres menores de edad. En Durango, fueron secuestrados diez hombres. Los cuerpos decapitados de 12 hombres aparecieron en Yucatán; en el Estado de México fueron masacrados 24 hombres en un mismo hecho y en Tijuana fueron encontrados 12 cadáveres en un mismo lugar.

Las *narcomantas* en las que los delincuentes lanzan mensajes a las autoridades y grupos rivales se multiplicaron en distintas ciudades del país, incluso en aquellas vigiladas por el Ejército. La audacia de los criminales fue tal que llegaron a robarse cinco avionetas que estaban bajo el control de la PGR en Navolato, Sinaloa. Luego fueron recuperadas por las autoridades.

El miércoles 7 de octubre fueron detenidas en las instalaciones del club de fútbol América, siete personas vinculadas al equipo Los Mapaches, de Michoacán. Fueron acusadas de estar ligadas a grupos de narcotraficantes.

El 27 de octubre la PGR informó que altos mandos de la dependencia tenían vínculos con los narcotraficantes. El 18 de noviembre Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol México, fue detenido como parte de la Operación Limpieza. Se le acusa de vender información a los *narcos*. Dos días después fue apresado Noé Ramírez Mandujano, el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y quien representó a México ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga. El ex comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, también fue sometido a investigación. La Operación Limpieza llegó hasta los militares. El 26 de diciembre fue aprehendido el mayor Arturo González Rodríguez, acusado de ven-

der armas del Ejército a los *narcos* y de recibir de ellos dinero a cambio de información. A principios de ese mes, la Secretaría de la Defensa Nacional informó al Congreso que uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares y que 150 mil soldados han desertado en los últimos ocho años.

Las autoridades detuvieron a Eduardo Arellano Félix, miembro de la dinastía de hermanos que fundaron el cártel de Tijuana; a Jaime González Durán, uno de los líderes de Los Zetas; a un sobrino de *El Mayo* Zambada, dirigente del cártel de Sinaloa, y a Ángel Orlando Urquiza, uno de los miembros más prominentes del cártel de Juárez. Junto con este último fue detenida Laura Zúñiga Aguilar, reina de belleza de Sinaloa.

En julio, Guillermo Valdés, responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, comentó que era posible que algunos legisladores tuvieran apoyo económico del *narco*. El 17 de ese mismo mes la Armada de México detuvo en aguas nacionales a un submarino que transportaba más de una tonelada de cocaína y decomisó en Zapopan, Jalisco, ocho mil tambos con sustancias base para elaborar drogas sintéticas. En una operación en la que participaron también los gobiernos de Estados Unidos e Italia, se detuvo a 175 presuntos miembros del cártel del Golfo, se incautaron 60 millones de dólares y más de 40 toneladas de drogas.

El 18 de septiembre el presidente Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas para que los bienes de los delincuentes pasen a manos del gobierno. También propuso a los legisladores despenalizar el consumo de pequeñas cantidades de estupefacientes.

Los medios llegaron a contabilizar 42 ejecuciones en un solo día. *El Universal* publicó, el 3 de diciembre que, de acuerdo con su conteo, las muertes vinculadas al crimen organizado sumaban 5,031 “cifra nunca presentada”. El diario señaló que pasar de cuatro mil muertes a cinco mil, “tomó sólo 42 días”. Cinco días después, el procurador general de la

República, Eduardo Medina Mora, informó que las ejecuciones vinculadas con el narcotráfico aumentaron 117%.

La Encuesta Nacional de Adicciones reveló que el número de consumidores de drogas ilegales se duplicó en seis años.

4. La “inacabada” reforma energética

Lo que parecía imposible en abril de 2008, cuando el Frente Amplio Progresista tomó la tribuna de la Cámara de Diputados, se hizo realidad seis meses después: el acuerdo parlamentario entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un amplio sector del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para aprobar la reforma energética. El 28 de octubre los legisladores dieron el visto bueno a siete dictámenes que modifican diversas leyes federales. Sin embargo, la reforma fue calificada de insuficiente por todos los actores involucrados. Las modificaciones legales dan autonomía presupuestaria y de gestión a Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con los representantes perredistas que votaron en favor, la reforma evitó los “intentos privatizadores” que se incluían en los primeros proyectos, pues se estableció la prohibición de que la iniciativa privada participe en la refinación y el transporte de hidrocarburos. Las iniciativas no incluyeron acotar el poder del sindicato petrolero en la paraestatal.

El acercamiento entre los partidos comenzó a fraguarse a principios de semestre. El 15 de julio, Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas, anunció que las tres principales fuerzas políticas comenzaron a dialogar en torno a la reforma energética. Una semana después se llevó a cabo en el Senado el último de los 21 foros sobre la reforma energética, durante los cuales participaron intelectuales y políticos para expresar sus puntos de vista sobre las diversas iniciativas.

El PRI presentó al Congreso su propuesta de reforma el 23 de julio. La iniciativa permitía la inversión privada en aguas profundas, pero con restricciones. Según Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priístas, su propuesta fortalecería a Pemex, sin privatizarlo. Casi un mes después, el 20 de agosto, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista su propuesta de reforma que incluía, entre otras cosas, una mayor inversión en la exploración y la construcción de refinerías, pero sin ningún tipo de inversión privada. La propuesta insistía en que no se puede utilizar el petróleo para cubrir la falta de una profunda reforma fiscal.

Los presidentes nacionales del PRI, Beatriz Paredes, del PAN, Germán Camacho, y del PRD, Guadalupe Acosta, se reunieron el 24 de julio para conversar sobre la reforma y acordaron que ningún grupo parlamentario intentaría “albazos” ni procedimientos unilaterales que tuvieran como fin aprobar las modificaciones legales.

El 27 de julio un grupo de ciudadanos y organizaciones gubernamentales opositoras a la privatización del petróleo organizó la primera consulta popular sobre el tema. En la ciudad de México participaron más de 80 mil personas que se pronunciaron en contra de una reforma privatizadora. El 10 de agosto se llevó a cabo una segunda consulta que, de acuerdo con los organizadores, sumó la participación de más de tres millones de ciudadanos, de las cuales el 91% expresó su desacuerdo en la intervención en Pemex de la iniciativa privada.

Los acuerdos interparlamentarios que comenzaron a cocinarse a principios del semestre fraguaron el 20 de octubre, cuando los senadores de los tres partidos mayoritarios decidieron, en comisiones, dar a Pemex mayor autonomía e impedir la participación privada en la refinación, el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos. Tres días después la reforma pasó al pleno donde se aprobó con el voto a favor de 114 de los

119 legisladores presentes, pese a la oposición de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores que habían anunciado que impedirían que eso ocurriera y mantenían un plantón frente al recinto legislativo.

Durante todo el semestre el Movimiento en Defensa del Petróleo encabezado por López Obrador realizó diversas manifestaciones en contra de la reforma. El 28 de octubre el político tabasqueño fue recibido en la Cámara de Diputados donde expresó sus puntos de vista sobre la reforma y exigió a los legisladores no ser “cómplices” del “mayor agravio al pueblo de México”.

Al día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la reforma energética. Los legisladores perredistas más cercanos a López Obrador subieron a la tribuna, pero no pudieron impedir que los diputados del PAN, del PRI y muchos de sus propios compañeros aprobaran la “inacabada” reforma energética.

5. El avionazo de Mouriño

Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, y José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la SIEDO, murieron el 4 de noviembre al estrellarse el avión en el que viajaban. La aeronave cayó en plena ciudad de México cuando se preparaba para aterrizar en el aeropuerto. En el hecho murieron otras 13 personas y hubo más de 40 lesionados, 13 de ellos graves.

La aeronave despegó del aeropuerto de San Luis Potosí. Durante el trayecto las condiciones meteorológicas fueron favorables, no se reportó ninguna falla técnica y tampoco hubo ninguna señal de auxilio de los pilotos. Minuto y medio antes de que el avión se desplomara, la torre de control del aeropuerto de la ciudad de México perdió contacto con la nave.

Esa misma noche, el presidente Felipe Calderón anunció que el gobierno federal investigaría a fondo las causas de la tragedia. Tanto el mandatario

como el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Tellez, insistieron desde el primer momento en que no había indicios “que permitan formular una hipótesis diferentes a la de algún accidente”.

A la capital del país llegaron especialistas en desastres aéreos de Gran Bretaña y Estados Unidos para auxiliar en las investigaciones, que, anunciaron las autoridades, arrojarían resultados definitivos en 11 meses.

El 6 de noviembre Calderón encabezó la ceremonia fúnebre donde los funcionarios fallecidos recibieron honores militares. El presidente salió en defensa de Mouriño de quien dijo, “fue objeto de críticas y víctima de calumnias”. Calderón se refería a las acusaciones sobre tráfico de influencias de la familia Mouriño y a la supuesta participación del padre de Juan Camilo en operaciones con recursos de procedencia ilegal. El PAN también realizó posteriormente un homenaje a Mouriño. Ahí Calderón dijo que su amigo, “como el Cid Campeador, seguirá ganando batallas después de muerto”.

Cuatro días después de la tragedia las autoridades informaron que no se encontraron indicios de sustancias explosivas por lo que descartaban la hipótesis de una bomba. El 14 de noviembre, Tellez declaró que la causa del accidente fue la impericia de los pilotos que entraron a la estela de turbulencia que dejó un avión que volaba delante de ellos, lo que originó que perdieran el control. El funcionario confirmó también que se encontraron irregularidades en las certificaciones de los pilotos que tripulaban la nave.

El 10 de noviembre Calderón nombró a Fernando Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.

6. Crisis en el PRD

Tras ocho meses de conflictos internos suscitados por el proceso electoral para elegir al nuevo dirigente del PRD, Jesús Ortega tomó protesta como presidente de ese instituto político el 30 de noviembre, luego de que el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgara el triunfo. Alejandro Encinas, su contendiente en el proceso, criticó el fallo y se negó a asumir la secretaría general del partido aunque decidió continuar como militante perredista.

Durante todo el semestre las acusaciones mutuas de fraude en el proceso electoral del 16 de marzo continuaron entre los contendientes y sus seguidores.

El 19 de julio la Comisión Nacional de Garantías decidió anular las elecciones por considerar que hubo irregularidades en más de 20% de las casillas. La instancia anunció que el Consejo Nacional de ese partido tendría 30 días para convocar a elecciones extraordinarias. La decisión dejó inconformes tanto a Encinas como a Ortega y la disputa continuó, tanto que el sexto Consejo Nacional de ese partido tuvo que realizarse en una sede alterna, pues la que estaba originalmente prevista fue tomada por simpatizantes de Encinas.

Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión Nacional de Garantías, renunció a ese cargo el 3 de agosto por considerar que los otros dos comisionados favorecían al bando de Jesús Ortega.

Tras la definición del nuevo presidente perredista se llevó a cabo el séptimo Consejo Nacional del PRD en el que se aprobó que ese partido no establecerá alianzas para las elecciones de 2009.

7. Nuevas reglas electorales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó prácticamente en su totalidad la reforma electoral aprobada en enero de 2008. El 7 de julio determinó que son constitucionales las disposiciones que prohíben la contratación de espacios publicitarios para propaganda electoral por parte de candidatos, precandidatos, partidos políticos, empresarios y ciudadanos.

Ese mismo día, el Instituto Federal Electoral (IFE) se comprometió a no destruir las boletas de las elecciones federales de 2006 en acatamiento a una recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Consejo General del IFE aprobó, el 11 de julio, el reglamento que fija las normas para el acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión. En el documento se reitera que la única instancia autorizada para contratar la transmisión de propaganda político-electoral en los medios electrónicos de comunicación es el propio IFE.

La autoridad electoral también impuso millonarias multas a los partidos políticos por considerar que incumplieron ciertas disposiciones electorales. Entre ellas destacan multas al PAN por la “injerencia abusiva” del entonces presidente Vicente Fox en los comicios y al PRD por la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados y por el plantón en Paseo de la Reforma.

8. Educación, los maestros reprobaron

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el 17 de agosto los resultados de una prueba que aplicó a sus maestros: el 67% de los profesores reprobó el examen. Tres días después, la SEP comenzó el programa piloto de la Reforma a la Primaria, que incluye media hora más de clases, restituye las clases de Formación Cívica y Ética e incorpora la enseñanza del inglés.

Las movilizaciones de maestros en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (que implica entre otras cosas que las plazas magisteriales ya no puedan ser heredadas y vendidas) continuaron en el país. En Morelos, el conflicto magisterial se recrudeció. En octubre, los maestros cerraron en diversas ocasiones las principales carreteras del estado y se enfrentaron con policías que los desalojaron. El Ejército intervino para

apoyar a los cuerpos policiales. El paro magisterial, que comenzó en el 18 de agosto, se levantó el 6 de noviembre. En Guerrero, 25 mil maestros mantuvieron la suspensión de clases por más de 70 días.

En tanto, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, entregó 59 camionetas de lujo a líderes magisteriales del país. Luego dijo que no eran para ellos sino para rifarlas y obtener recursos que se destinarían a labores educativas.

En la UNAM sólo fueron admitidos nueve de cada 100 aspirantes.

9. Cambios en el gabinete

El presidente Felipe Calderón nombró como secretario de Economía a Gerardo Ruiz Mateos en sustitución de Eduardo Sojo, el 6 de agosto. El 25 de noviembre, Luis Felipe Bravo Mena, quien se desempeñaba como embajador de México en El Vaticano, fue nombrado secretario particular de Calderón, puesto que ocupaba César Nava. Fernando Gómez Mont Urueta fue nombrado secretario de Gobernación, el 10 de noviembre, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño.

10. Adiós al Informe

La ceremonia en la que el jefe del Ejecutivo tenía que presentar su informe anual de actividades al Congreso de la Unión y que fue durante muchos sexenios el “Día del Presidente”, terminó. Las reformas aprobadas el 19 de junio que establecen que el mandatario ya no debe acudir a la sede del Congreso se aplicaron por primera vez. El 1 de septiembre, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, entregó a los representantes del Poder Legislativo el documento en un trámite que duró apenas unos minutos.

11. Avance electoral del PRI

El PRI resultó el gran ganador en las elecciones locales en los estados de Guerrero e Hidalgo. En el primero se quedó con la mayoría del Congreso y las alcaldías de las ciudades más importantes. El PRD perdió 20 de las 44 presidencias municipales que tenía. En Hidalgo, el Revolucionario Institucional triunfó en más de la mitad de las alcaldías.

12. Derechos humanos

Con el argumento de que hay que estar “preparados para combatir al crimen organizado”, la policía de León, Guanajuato, entrenó a sus policías en técnicas de tortura. Dos videos demostraron la forma en que se capacitaba a los gendarmes. El alcalde panista de esa ciudad, Vicente Guerrero Rojo, dijo que le valían “guilson” las críticas que se generaron al respecto. Sin embargo, luego aceptó la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que le solicitó suspender esas prácticas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió, el 11 de julio, ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con actos cometidos por elementos del Ejército en operaciones de combate al crimen organizado. Entre las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados, la CNDH documentó homicidios, torturas, tratos crueles y degradantes, incomunicación, violación a la seguridad jurídica, uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y ejercicio indebido de la función pública. Los hechos ocurrieron en Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Michoacán. La Sedena aceptó de inmediato las recomendaciones.

13. Gritos al presidente

Durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud, dos de los jóvenes premiados interrumpieron con gritos al presidente Felipe Calderón. Andrés Leonardo Gómez Emilsson le gritó: “Espurio”. Marco Jiménez Santiago le siguió: “No hay libertad en este país!”. Los jóvenes fueron detenidos por el Estado Mayor Presidencial y dejados más tarde en libertad sin cargos en su contra. El hecho suscitó una polémica en los medios de comunicación en torno al respeto a la figura presidencial y la libertad de expresión.

14. Censura a Creel y el freno a las reformas

El 2 de julio Televisa transmitió en su programa Primero Noticias una nota informativa relacionada con los foros sobre la Reforma Energética en la que aparecía la imagen de un grupo de legisladores. De esa escena fue borrado el rostro del senador Santiago Creel Miranda, quien ha tenido diferencias con la televisora.

La Secretaría de Gobernación envió un extrañamiento a Televisa “por anular de manera evidente” la imagen del legislador panista. La empresa respondió que se trató de un “error de edición”.

Durante el semestre fueron frenadas por legisladores del PAN y el PRI las iniciativas que pretenden modificar las leyes que rigen a los medios electrónicos nacionales.

15. Crece el poder de Slim

El multimillonario Carlos Slim compró 6.4% de las acciones de la empresa que edita el periódico estadounidense *The New York Times*. El anuncio fue hecho en septiembre. Dos meses después, el empresario mexicano formalizó su alianza con Multivisión y EchoStar y compró 150 millones de dólares en acciones de la financiera estadounidense Citigroup.

16. Mejores relaciones con Cuba

El 21 de octubre el presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos al canciller cubano Felipe Pérez Roque, quien entregó al mandatario mexicano una invitación para visitar la isla. El 16 de diciembre, en Brasil, Calderón se reunió con el presidente de Cuba, Raúl Castro, quien dijo que entre ambos países ya no hay asperezas. Durante el sexenio de Fox las relaciones entre ambos países se deterioraron.

17. Las manifestaciones de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador continuó sus movilizaciones a lo largo del país, las cuales tuvieron como eje la “defensa del petróleo” y la oposición a la reforma energética. El *Sendero del Peje* publicó una lista de “traidores” entre los que se encuentran Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Navarrete y Leonel Godoy, a quienes acusa de no asumir la defensa del petróleo. López Obrador también se manifestó frente a Televisa para exigir “libertad de expresión”.